



Nº. Radicado : 2022-EE-0518541

Folios: 1

Fecha : 16/06/2022 15:33:17

Anexos : 0

Destino: ELIAS APONTE BUSTAMANTE

Origen: 10000-DESPACHO DEL (DE LA) PERSONERO

Asunto: RESPUESTA PROPOSICION 334

Bogotá D. C.,

Doctor

ELIAS APONTE BUSTAMANTE

Subsecretario de Despacho (E)

Comisión Segunda Permanente de Gobierno

Concejo de Bogotá D.C.

secretariageneral@concejobogota.gov.co

CL 36 28 A 41

Código Postal 111311

Bogotá D.C.

ASUNTO: Respuesta a la proposición 334 de 2022 – reformulación de políticas públicas de la diversidad étnica en Bogotá y consulta previa, libre e informada en al capital.

Respetado señor Subsecretario:

La Personería de Bogotá D.C., en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales como agente del ministerio público, veedor ciudadano y garante de derechos humanos, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto Ley 1421 de 1993 y en virtud de lo establecido en el artículo 54 del Acuerdo 741 de 2019, se permite dar respuesta en los siguientes términos:

1. Sírvese informar todas las solicitudes, recomendaciones o acompañamientos que se han realizado en el proceso de reformulación de las políticas públicas de las comunidades étnicamente diferenciadas en Bogotá.

La Personería de Bogotá D.C., a través de la Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos humanos ha realizado diversas acciones en el marco del acompañamiento al proceso de reformulación de la Política Pública Distrital para los Grupos Étnicos con presencia en Bogotá, a saber:

Mediante radicado 3065180 del 29 de octubre de 2021 se solicitó a la Subdirección de Asuntos Étnicos información sobre la presentación del balance de la implementación de los PIAA étnicamente diferenciados durante la vigencia 2021 y de la ruta metodológica de construcción participativa del nuevo ciclo de Política Pública Distrital para los Grupos Étnicos con presencia en Bogotá y se citó a la SAE a reunión para escucharlos sobre dos temas puntuales entre los cuales se destaca la presentación del proceso o ruta metodológica de construcción del nuevo ciclo de Política Pública Distrital para los Grupos Étnicos con presencia en Bogotá.

Como resultado de la solicitud se adelantó reunión el 9 de febrero pasado a la 11:00 am hasta la 01:30pm, donde la SAE expuso las etapas/fases del proceso de reformulación de la PP para grupos étnicos en Bogotá, concluyendo que se aproxima la fase de agenda pública en la cual se garantizará la participación de todos los grupos étnicos.

Se hizo acompañamiento a los siguientes espacios:

Reunión convocada por la Subdirección de Asuntos Étnicos el 6 de abril de 2022. En este espacio la SAE dio a conocer las etapas/fases propuestas para desarrollar el proceso de reformulación de las políticas públicas, concluyendo que se aproxima la fase de agenda pública en la cual se garantizará la participación de los diferentes grupos étnicos que se encuentran en Bogotá.

Reunión convocada para el día primero junio, para concertar el plan de trabajo para la reformulación de la Política Pública Pueblo Palenquero- Proceso Organizativo Kuagro Mona In Rí Palengue, la cual se desarrolló sin ningún inconveniente; no se recibe ningún requerimiento o queja por parte de la organización Kuagro Mona Rí Palenge y finalmente el pueblo Palenquero acepta las sugerencias de PNUD y se llega a la conclusión que las partes firmarán el acuerdo de subvención para el proceso de reformulación de la Política Pública del Distrito.

Acompañamiento al espacio técnico en donde se presentó la contextualización de la reformulación de la política pública indígena y avance en el marco de la metodología CONPES D.C, entre el Distrito y Autoridades Indígenas en Bakata. Este espacio se llevó a cabo el 07 de junio de 2022, sin inconvenientes. Como compromiso de la reunión se estableció una nueva mesa de trabajo entre la SAE y AIB para el 11 de junio de 2022 en el tema concerniente a la reformulación de las políticas públicas, pero la SAE no asistió.

Asistencia y participación a la reunión de concertación del plan de trabajo para la reformulación Política Pública Pueblo Raizal, realizada 11 de junio. La organización ORFA acepta las condiciones de PNUD y se llega a la conclusión que las partes firmarán el acuerdo de subvención para el proceso de reformulación de la Política Pública del Distrito.

2. Sírvase emitir concepto, en su calidad de defensores y garantes de los derechos fundamentales de la población, su concepto sobre la necesidad de realizar un proceso de consulta previa, libre e informada, en el proceso de reformulación de las políticas públicas de las comunidades étnicamente diferenciadas teniendo en cuenta que es en dicho marco normativo que se debe dar la participación de estas comunidades cuando se trate de la actualización, formulación y/o transformación de toda medida legislativa o administrativa que pueda afectar de manera directa o indirecta a dichas comunidades.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 2 del Decreto 1140 de 2018, que modifica el Decreto 2893 de 2011, entre las funciones del Ministerio del Interior, se encuentra:

“...10. Formular, promover y hacer seguimiento a la política de los grupos étnicos para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial, social y de género, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.”

En uso de sus funciones y atribuciones legales, el Ministerio del Interior, mediante Decreto 2353 de 2019, el cual modifica la estructura del Ministerio del Interior y determina las funciones de algunas dependencias, crea en la estructura del Ministerio las siguientes instancias:

2.5. Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa

2.5.1. Subdirección Técnica de Consulta Previa

2.5.2. Subdirección de Gestión de Consulta Previa

Las mencionadas dependencias, de acuerdo con lo estipulado el artículo 16 del referido Decreto, estarán encargadas entre otras funciones de:

“1. Impartir los lineamientos para la determinación de la procedencia de la consulta previa para la expedición de medidas legislativas o administrativas o la ejecución de proyectos, obras o actividades, que puedan afectar directamente a comunidades étnicas.

2. Liderar, dirigir y coordinar el ejercicio del derecho a la consulta previa, mediante procedimientos adecuados, garantizando la participación de las comunidades a través de sus instituciones representativas, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural.

...

5. Establecer directrices, metodologías, protocolos y herramientas diferenciadas para realizar los procesos de consulta previa, de conformidad con lo establecido en la legislación sobre la materia...”

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior atiende los procesos de consulta previa que se requieran de conformidad con la Constitución y la Ley, en el marco de sus competencias, es dicha entidad, y no la Personería de Bogotá, la llamada a determinar la procedencia o no de la Consulta Previa.

3. Sírvese informar sobre las posibles consecuencias disciplinaria que enfrentarían los servidores públicos del distrito, tanto funcionarios como contratistas, en caso de iniciar un proceso de reformulación de políticas públicas por fuera del marco de una consulta previa, libre e informada como lo determina la normatividad.

De la revisión de la petición transcrita se advierte que su objeto corresponde a la rendición de un concepto jurídico, en tanto, lo pretendido es que se determinen las eventuales consecuencias disciplinarias de iniciar un proceso de reformulación de políticas públicas de comunidades étnicamente diferenciadas sin el agotamiento de la consulta previa.

En ese orden, la respuesta al señalado requerimiento exige en cabeza de la entidad competente la existencia de facultades y atribuciones consultivas que le permitan emitir pronunciamientos de esa

naturaleza, por cuanto como lo prevén los artículo 6^o y 121² constitucionales, los servidores públicos solo pueden hacer lo que les está permitido en la Constitución y las leyes; lo que supone un régimen de responsabilidad que prohíbe a las autoridades estatales en general, incluyendo todos los órganos e instituciones del Estado ejercer funciones distintas de las establecidas en el ordenamiento jurídico.

A la Personería de Bogotá, D.C., como parte integrante del Ministerio Público, por expreso mandato del artículo 118 de la Constitución Política, le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas en el Distrito Capital.

En ese sentido, el artículo 100 numeral 8^o del Decreto Ley 1421 de 1993 *“Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”*, al establecer las atribuciones del Personero(a) de Bogotá, D. C., como veedor ciudadano, le otorga la potestad disciplinaria, traducida en la capacidad de efectuar las investigaciones correspondientes e imponer las sanciones que fueren del caso respecto de los servidores públicos del Distrito Capital.

Esas precisas competencias se encuentran regladas en el Acuerdo Distrital 755 de 2019 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., dentro del cual no se le atribuye la facultad de emitir conceptos jurídicos respecto de asuntos disciplinarios ni función consultiva alguna, razón por la que esta entidad no puede ejercer funciones de esa naturaleza y, por ende, no le es permitido pronunciarse sobre la solicitud formulada.

En estos términos, se da respuesta a lo solicitado y quedamos atentos a resolver las inquietudes que puedan surgir.


Atentamente,


JULIÁN ENRIQUE PINILLA MALAGÓN
Personero de Bogotá, D.C.

Elaboró: P.D para los Derechos Humanos
Secretaría Común

Revisó: Ricardo Hernán Medina Rico – P.D. para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos. 
Silvia Juliana Arciniegas – P. Delegada para la Coordinación de Potestad Disciplinaria 

Consolidó: Sandra M. Fernández – Personería Auxiliar

Aprobó: Paula Andrea Girón Uribe – Personera Auxiliar 

CONCEJO DE BOGOTÁ 21-06-2022 12:51:08

2022ER10176 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: PERSONERIA DE BOGOTÁ/JULIÁN ENRIQUE PINILLA

DESTINO: SECRETARÍA GENERAL/DUARTE CUADROS CARLOS ARTURO

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICIÓN 334 DE 2022

OBS: ---

¹ Constitución Política. Artículo 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

² Constitución Política. Artículo 21. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.